

PROCESO DE PAZ: ¿SE HA NADADO CONTRA LA CORRIENTE?

Jacinto Ruiz

(Negociador de la Corriente de Renovación Socialista)

Carlos Eduardo Jaramillo

(Consejero Gubernamental de Paz)

El proceso de paz culminado entre el Gobierno y la Corriente de Renovación Socialista es, sin duda, un importante paso adelante en la lenta pero progresiva reconversión de la protesta armada al nuevo esquema de convivencia democrática que necesita el país. Como negociación entre oponentes hubo, y es obvio, diferencias y antagonismos que enfrentaron a los voceros de las partes en muchos de los temas de la agenda de conversaciones. La revista ANALISIS POLITICO registró en la siguiente entrevista, hecha pocas semanas antes del acuerdo definitivo, una fase importante en el nivel de acuerdos y desacuerdos alcanzado hasta ese momento.

Análisis Político: ¿Cuáles han sido las convergencias y las discrepancias básicas entre el Gobierno y la Corriente de Renovación Socialista respecto de los dos temas fundamentales de la negociación: desmovilización y reinserción?

Jacinto Ruiz: Tenemos un desacuerdo fundamental. Para el Gobierno la negociación de paz se reduce al desarme y la reinserción del grupo guerrillero como corresponde a la estrategia de guerra integral en la que Gaviria enmarcó su política de paz. La C.R.S. piensa que la construcción de la convivencia y la superación del conflicto armado en Colombia pasa por instaurar una cultura de los Derechos Humanos, por abrir mayores espacios de participación para la ciudadanía y para las propuestas políticas alternativas, y por una fuerte inver-

sión social en las comunidades que han sido base social de la insurgencia armada.

En el fondo se trata de que nosotros concebimos el proceso no como una desmovilización sino, por el contrario, como una transición hacia una profunda movilización política. Y que la reinserción no es solo individual ni del grupo armado, sino de las regiones y sectores sociales vinculados al conflicto y que ahora optan por la solución negociada.

Carlos Eduardo Jaramillo: Para nosotros la desmovilización es uno de los productos del acuerdo final y como tal es un elemento que resulta de la combinación de los factores que componen la agenda de negociaciones. Es decir, la desmovilización apunta tanto a la dejación de armas como al desmantelamiento definitivo de la estructura militar del grupo

subversivo. La reinserción en cambio es el ejercicio que hace el Gobierno para buscarle espacios institucionales a los grupos que dejan las armas. En ese sentido, como búsqueda de espacios económicos y políticos, lo que le interesa al Gobierno es hacer una profunda inversión social en el sentido de que si a los reinsertos les va bien en la vida económica, política y social del país, es posible que ellos no tengan que volver a delinquir. No veo entonces cómo algunos hablan de falta de generosidad del Gobierno en las discusiones con la Corriente sobre el problema de la inversión social global. Hay en esto una confusión entre la reinserción individual y la inversión oficial en zonas de violencia. La reinserción es una cosa ligada directamente a los miembros de la organización y comprende los elementos de carácter económico, social y político que les permite desarrollar un trabajo político legal. La inversión social en zonas de violencia es un plan de recursos específicos para las regiones donde, por la presencia de estos grupos, se han generado graves alteraciones en la vida de las comunidades. Como el Estado de todas maneras atiende dichas áreas mediante programas interinstitucionales, los recursos resultado de las negociaciones son de carácter suplementario aun cuando no marginal y si no pueden solucionar de manera definitiva, como es obvio, problemas estructurales de desigualdad social, si son recursos nuevos orientados según los diagnósticos de los grupos desmovilizados que han tenido allí influencia política.

Análisis Político: En el temario de las negociaciones no se ha aceptado, por parte del Gobierno, la vocería de la C.R.S. respecto de sectores sociales específicos aduciendo que los guerrilleros solo se representan a sí mismos. ¿Qué opina sobre esto?

Jacinto Ruiz: Aquí se pone de manifiesto la estrechez de una política de paz que no reconoce la existencia de factores objetivos en la base del conflicto armado en Colombia. Ello reduce la negociación a una vulgar compraventa de armas y convierte los procesos de paz en un engaño para el país. Los procesos de negociación de los últimos años en Améri-

ca Latina (Nicaragua, El Salvador, Guatemala y ahora México) son fenómenos políticos y sociales que tramitan la solución de sus conflictos mediante nuevos pactos sociales.

En Colombia, la Constitución del 91 es un pacto social inconcluso que requiere desarrollo tanto legislativo como de participación de las comunidades y sectores sociales en la gestión de una democracia profundamente civilista. La insurgencia armada en Colombia sigue representado a los sectores sociales excluidos tradicionalmente y las negociaciones de paz no pueden consagrar una nueva exclusión.

Carlos Eduardo Jaramillo: Lo que pasa es que el esquema de negociación de la C.R.S. no es realista ya que desde el principio el Gobierno ha sido claro en decirles que el diálogo es con una organización armada y no con un partido político encargado de tramitar institucionalmente determinadas demandas de la comunidad. A ellos los reconocemos como grupo armado y no como representantes de la comunidad, porque la comunidad no necesita de organizaciones armadas que intermedien entre ella y el poder público. La comunidad tiene sus propios caminos para demandar la atención del Gobierno y éste, en la medida de sus recursos, atiende sus reclamos. Varias veces les hemos hecho, a los negociadores de la Corriente, cuentas de los recursos oficiales dirigidos a esas comunidades hasta el punto de mostrarles cómo sus magnitudes son mayores de lo que ellos mismos habían pensado. Confundir la negociación entre el Gobierno y una organización armada, con una negociación del Estado con todas las comunidades que tienen problemas y necesidades en términos de desarrollo y de integración nacional, es un ejercicio que desplaza las posibilidades reales de negociación hacia un campo maximalista y retórico de justicia social.

Análisis Político: ¿Cree usted que este modelo de negociación tiene aplicabilidad para un eventual acuerdo entre el Gobierno y la Coordinadora Simón Bolívar?

Jacinto Ruiz: Esta negociación tiene como virtualidad el entierro definitivo del modelo de negociación Barco-Gaviria. Nosotros hemos planteado que se requiere institucionalizar una política de paz desarrollando el artículo 22 de la Constitución Nacional a la manera de un estatuto para la paz como pedía hace poco la misma Procuraduría General de la Nación. Igualmente hemos propuesto la conformación de un Consejo Nacional de paz que articule la participación de la sociedad civil colombiana como gestora y líder en la construcción de la convivencia. El país necesita liderazgos morales y nuestros gobiernos que convocan a la guerra, al culto del dinero y a la insolidaridad no están en condiciones de hacerlo.

Finalmente proponemos un Ministerio de la Paz y la Participación que centralice iniciativas y recursos ya que la paz no puede seguir siendo asunto menor atendido por funcionarios menores.

Carlos Eduardo Jaramillo: En las conversaciones entre el Gobierno y la Coordinadora ésta siempre ha señalado de modo implícito y explícito su interés en marcar un camino propio en las negociaciones de paz. En ese sentido es ingenuo buscarle, a lo que se adelanta con la Corriente, aplicaciones mecánicas frente a un eventual acuerdo con la Coordinadora. La verdad es que cuando nosotros hemos conversado con la Coordinadora hemos visto sus esfuerzos para hacer una negociación totalmente distinta a las desarrolladas anteriormente. En esa perspectiva hemos tenido dificultades con ellos porque tal posición niega de entrada las virtudes de un proceso de nego-

ciación global adelantado por el Estado sobre una serie de experiencias, de errores y de correcciones para crear un esquema sólido y estratégico de reconversión democrática. Nada indica por el momento que la Coordinadora haya cambiado sus apreciaciones excluyentes respecto de que el Gobierno solo quería repetir fórmulas anteriores para aplicárselas a ella. Nada indica que hayan dejado de desconocer unas experiencias positivas, valoradas y evaluadas como efectivas tanto por el Gobierno como por la Sociedad Civil.

De todas maneras nosotros pensamos que los mecanismos desarrollados en la negociación actual son positivos a sabiendas de que cada acuerdo tiene sus particularidades. Por eso, volviendo a la pregunta, consideramos que esta negociación con la C.R.S. no le abre ni le cierra las puertas a nadie, entre otras cosas porque el Gobierno siempre ha tenido despejado el camino para cualquier organización que quiera reinsertarse en la vida democrática del país. En resumen, ni el Gobierno ni la Coordinadora necesitan de organizaciones intermediarias ni de acuerdos referenciales para explorar de nuevo los caminos de un diálogo porque esas puertas están abiertas como la Coordinadora muy bien lo sabe. La verdad es que yo no me imagino a la Coordinadora dejándose abrir ó cerrar el camino de la paz por un grupo que ellos consideran pequeño, sin los suficientes atributos para tomarse esas prerrogativas y, sobretodo, con el agravante de ser una escisión de sus propias fuerzas con todo lo que eso puede significar para el radical extremo de sus dirigentes.

